
Crisis y condiciones de vida. Algunos comentarios**

Enrique Provencio.*

UNO DE LOS CAMPOS EN los que sin duda se ha desarrollado durante los últimos años una discusión paralela entre las versiones oficiales y otras interpretaciones de diverso tipo, es el relacionado a los efectos sociales de la crisis. Aunque los aspectos centrales de las evaluaciones gubernamentales sobre el tema se refieren principalmente al comportamiento de variables estrictamente económicas, destacándose entre ellas las financie-

ras, no deja nunca de mencionarse que pese a lo agudo de la crisis el deterioro de los niveles de vida no es tan alto como se hubiera esperado, que los costos sociales del ajuste se está amnoriando gracias a ciertas acciones públicas y que uno de los objetivos centrales de la política económica es el de procurar un medio de vida digno para la mayoría de la población. No se oculta, es cierto, que este propósito no se ha realizado, e incluso se han hecho reconocimientos relativamente críticos. En general, sin embargo, se minimizan las verdaderas consecuencias de la crisis y de la política de ajuste sobre los trabajadores, los campesinos y otros grupos. Lo poco que se acepta es considerado no sólo como lo inevitable,

sino incluso como algo necesario para recuperar la capacidad de crecimiento y controlar la inflación, y de esa forma ir logrando más empleos y una recuperación paulatina de los salarios reales.

En contraposición a tal evaluación, la mayoría de las organizaciones sindicales, algunos medios académicos y los grupos y partidos de oposición insisten en que el deterioro del nivel de vida se ha convertido en una de las más graves consecuencias de la crisis. Este consenso tiene muchos niveles en la percepción de las manifestaciones, la magnitud y las implicaciones del problema, como son también muy desiguales las elaboraciones programáticas derivadas de la nueva forma que está adoptando el empeoramiento de

** Resumen de la Ponencia para el Seminario "La Crisis, La Deuda y la Reconstrucción". 6-8 de Diciembre de 1985. La Trinidad, Tlax.

* Profesor de la Facultad de Economía de la UNAM.

las condiciones de vida. En lo general, los planteamientos se han circunscrito al comportamiento de los salarios reales, del empleo y, en menor medida, de la seguridad social y algunas prestaciones. Esto constituye, por decirlo de alguna forma, el primer nivel en el que se expresan las consecuencias directas de la crisis sobre el grueso de la población. Tales elementos constituyen la parte determinante del ingreso, pero ha quedado un poco al margen la consideración de aspectos que para millones de personas representan el problema principal. No se está considerando suficientemente, por ejemplo, como parte de un solo conjunto, el ingreso de los campesinos ejidatarios, que no dependen del salario; lo mismo pasa con el caso del ingreso de tantos que no siendo asalariados tampoco tienen percepciones fijas ni seguras. Como consecuencia de tales lagunas, los planteamientos, programáticos o no, dejan fuera aspectos fundamentales que no podrían faltar en una propuesta que pretenda rebasar los planos políticos más inmediatos y busque desarrollar alternativas reales.

El deterioro social global y acumulado

En ese primer nivel siguen quedando fuera algunos elementos, pero son más notorias las ausencias en un segundo plano, en el que podrían considerarse las *implicaciones del desplome* de los salarios reales, del aumento del desempleo, del nulo avance de la seguridad social, de la disminución de los gastos públicos, del retiro de los subsidios a bienes básicos. ¿Cuáles son los efectos de todos estos hechos sobre las condiciones de alimentación y nutrición, sobre el estado de la salud y sobre otros aspectos como la educación y la recreación que son a fin de cuentas los que realmente definen los niveles de vida?

Estas lagunas no son casuales o consecuencia de simples huecos en la discusión o en el análisis. Obedecen, por un lado, al hecho de que en algunos casos existen desfases temporales entre la crisis y sus manifestaciones sobre la salud, la nutrición, etc.; y además se carece de suficiente informa-

ción como para conocer ampliamente tales efectos; por otro lado, el problema es que en realidad no existe una predisposición para acercarse a la consideración de los efectos sociales de la crisis desde esta perspectiva e *incluso la mayor parte de los sistemas de información no están diseñados para ello*. No se puede negar que los llamados mitos del desarrollo permearon aún a los que siempre se resistieron a creer en cualquier bondad del sistema pues incluso estos aceptaban como un hecho que existía una tendencia general a la mejoría en las condiciones de vida, tendencia que en efecto fue un hecho durante algunas décadas aunque existieran y se fueran agravando las desigualdades. La crisis actual acabó con dicha tendencia sin que todavía se alcanzaran niveles de vida siquiera mínimos. Pese a eso, apenas se está viendo claramente que de hecho *nos encontramos ya ante un verdadero retroceso vital*, si así puede decirse, y *no sólo ante una pausa en el camino del desarrollo*. Con todo y estos problemas informativos o de visión, están apareciendo ya, recientemente, estudios parciales que permiten una aproximación a la perspectiva de los efectos de la crisis que *necesitamos*.

Pero no se piense que ante el objetivo de considerar los efectos de la crisis sobre los aspectos directos que conforman o definen los niveles de vida, se dejan de lado los elementos que integran el primer nivel que se mencionaba. Por el contrario, es necesario partir de este primer nivel pues de hecho aporta la base para evaluar las dimensiones reales de las consecuencias sociales de la crisis. Más que repetir información, dados los objetivos de estas notas, sólo se destacarán algunos elementos relacionados con el ingreso, el empleo, la distribución del ingreso y el gasto público en los llamados sectores de atención social.

1º Sobre la contracción salarial, principal determinante del deterioro de los niveles de vida, es pertinente recordar que la segura caída del salario real en 1986 no significa un año malo más, sino la culminación de una década de disminución casi ininterrumpida para el

grueso de los asalariados. En cuatro años (1983-1986) se podría acumular una pérdida de más del 40% del salario real, quedando éste, aproximadamente, a los niveles de 1962, cuando apenas empezaba a remontarse la larga fase de descenso que se había iniciado a principios de los cuarenta. En el poco probable caso de que en 1987 se iniciara una recuperación salarial, pasaría quizá una década para regresar a los niveles de poder adquisitivo de 1976.

2º Independientemente de la ya generalizada desconfianza hacia las estadísticas oficiales sobre desempleo, existen múltiples evidencias que permiten sostener que el número de desempleados se ha incrementado ya hasta un 12-13 por ciento de la población económicamente activa, con lo que subempleados y desempleados estarían constituyendo la mitad o más de la población en edad de trabajar. Deterioro salarial y pérdida de empleo sentaron las bases para que a partir de 1982 se acelerara la reconcentración del ingreso iniciada desde 1977. La pérdida en la participación de las remuneraciones salariales dentro del ingreso nacional desde 1977 hasta 1986 alcanza aproximadamente los 14 puntos porcentuales, y la proporción es apenas similar a la de los primeros años de la década de los cincuenta.

3º La caída sostenida del ingreso y el aumento del desempleo a partir de 1982 se han visto agravados por una contracción real de los volúmenes de gastos para los servicios públicos y para la mayor parte de los subsidios al consumo, lo que ha tenido impacto tanto en el empleo como en el precio de los bienes básicos y en la cobertura y calidad de los principales servicios públicos. Se pueden dar muchos ejemplos concretos que permiten sostener estas afirmaciones y que delatan cómo las reducciones presupuestales están afectando los niveles de vida, pero sólo como muestra se ponen a consideración los siguientes: el gasto público por persona en salud para 1986 es en términos reales inferior al de hace diez años; su caída como proporción del producto fue de dos puntos entre 1979 y 1985; la capacidad de atención física en instituciones como el Seguro Social

comenzó a caer a partir de 1984; la caída real del gasto en salud alcanzó el 25% entre 1983 y 1985. Los ejemplos podrían presentarse para los casos de educación y abasto, y las conclusiones serían similares.

A estos tres elementos habría que agregar otros, por ahora sólo se mencionarán algunos:

En primer lugar, es conveniente recordar que todas estas consecuencias de la crisis son más agudas para los grupos de menores ingresos de entre los propios asalariados, los que ya antes de la crisis eran más vulnerables ante la inflación y ante los comportamientos negativos del gasto público.

En segundo lugar, puede decirse que todos estos fenómenos no se presentan en forma homogénea a lo largo y ancho del país, pues en algunas regiones tanto urbanas como rurales sus implicaciones son peores que a niveles agregados.

En tercer lugar, los tres elementos mencionados se tendría que observar, en sí mismos y en sus efectos, en la perspectiva del reajuste que se empezó a aplicar desde principios de 1985 y que sin duda será más grave en 1986.

Ahora bien: ¿Cómo se estarían reflejando ya todos estos problemas en los planos más concretos que, como se decía, definen o conforman los niveles de vida? Ya se comentaba que la información disponible a este grado de detalle no es precisamente muy abundante, y más bien resulta fragmentaria y aporta indicaciones indirectas pero reveladoras. Sólo se hará una síntesis de tales indicaciones.

La reducción del ingreso familiar real, tanto por la caída del salario como por el retiro de subsidios y otros factores, ha tenido en estos años un efecto de recomposición del consumo pues se destina una mayor proporción del gasto con el fin de tratar de mantener el consumo alimenticio al menos al nivel previo a la recomposición. Se gasta una mayor proporción del ingreso familiar en alimentos y bebidas y otros rubros, pero con eso se reduce la proporción del gasto en otros conceptos, por ejemplo, en educación y recreación, vestido y algunos servicios. Como enseguida se verá, esto no significa

siquiera que se mantenga el nivel del consumo alimenticio, pues también se presenta una modificación en su estructura y contenido: unos alimentos se sustituyen por otros de más bajo precio; se reducen las cantidades o volúmenes adquiridos o incluso, se eliminan de la dieta. De acuerdo a encuestas realizadas para el Distrito Federal, en el primer caso a partir de 1983 se estarían sustituyendo parcialmente lácteos por otras bebidas; el consumo de carne por huevo, etc; para el segundo caso, se estaría reduciendo el consumo principalmente en carnes, leche y pescado. Es decir, la recomposición del gasto afecta principalmente a los alimentos más nutritivos. El problema es aún mayor si se considera que la distorsión en los patrones de consumo alimenticio tiene peores consecuencias en un periodo como el actual ya que el incremento en los precios de los productos favorecidos por tal distorsión daña todavía más el consumo. Este proceso se ha presentado incluso en las ventas de CONASUPO.



Si se observa el problema en un periodo más largo se puede tener una mejor apreciación de sus implicaciones, ya que para los grupos de menores ingresos, en zonas urbanas y rurales pero principalmente en estas últimas, se estuvo observando entre 1959 y 1979 una disminución en los niveles de nutrición, más por la modificación de los patrones de consumo que por el comportamiento del ingreso. Ahora, sin embargo, en la mayoría de los casos sí se presenta la contracción de la capacidad de compra pero en condiciones en las que es más difícil regresar a los otros hábitos de consumo. Todo esto indica que en un

periodo corto se han producido modificaciones en el consumo familiar de la población de más bajos ingresos, aunque, es necesario repetirlo, no se tienen aún informes detallados al respecto. Si se cuenta, sin embargo, con algunas evidencias, o por lo menos estimaciones, que señalan las consecuencias de este fenómeno, a lo que se agregan por otro lado los problemas agravados u ocasionados por la política de gasto público.

El lapso entre las modificaciones del consumo y el descenso en los niveles de nutrición puede ser más o menos largo dependiendo de varios factores, pero ya a partir de 1985 se habrían empezado a manifestar. Así lo sostienen incluso diversos documentos oficiales que señalan, concretamente, que sólo hasta 1988 se alcanzará el promedio nacional en la ingesta de calorías y proteínas que existía en 1982, y eso considerando para 1985-1988 la recuperación que se preveía hace 3 años, previsión que ya ha sido modificada desfavorablemente. El descenso que se preveía para los años 1982-1984 en el consumo de proteínas y calorías era considerable (entre 10 y 18%, en promedio, según diversos grupos de ingresos), y para algunas regiones del país, principalmente para el Sureste, ese descenso continuaría en los próximos años, incluso dentro de la previsión original que esperaba una recuperación sostenida desde el presente año. Estas previsiones se repiten en diferentes fuentes y son incluso consideradas como muy optimistas por algunos especialistas.

Si el efecto de los cambios en el consumo sobre la nutrición puede ser más o menos retrasado, el de la mayor desnutrición sobre los niveles generales de salud es todavía más difícil de precisar. Como lo sostienen diversos especialistas, las relaciones entre recesiones o auges y las condiciones de salud no son siempre directas ni inmediatas; se conocen casos en otros países, por ejemplo, de mejorías en los índices de mortalidad infantil aún en largos periodos de recesión. En lo que sí existe acuerdo es que la mayor desnutrición asociada con políticas de austeridad en el gasto público que

afectan a los servicios, es por lo general un problema que tiene consecuencias directas en el estado de salud, principalmente en la mortandad infantil y otros indicadores. En el caso de México, a partir de 1984 muchos testimonios directos han señalado que esa conjunción de factores empieza a manifestar sus consecuencias, haciéndose cada vez más presente el riesgo de que se estancuen las tendencias al descenso de las tasas de incidencia de algunas enfermedades, la estabilización del descenso de la mortandad infantil e incluso su elevación, y así se ha dado a conocer a partir de casos concretos en instituciones de salud.

Pero si se observan otras experiencias en condiciones parecidas a las actuales de México, las conclusiones son claras: hay un deterioro en las condiciones generales de salud en situaciones de recesión, y su agudización y el mayor o menor desfase depende fundamentalmente de las políticas públicas orientadas a compensar los efectos de la crisis. De aquí que en las actuales condiciones adquiera tanta importancia la lucha por incrementar y reorientar los gastos en servicios de salud y seguridad social, en abasto y en otros servicios. Si se amplía un poco más esta idea, resulta también determinante la política de dotación de infraestructura urbana básica, por la relación tan estrecha que existe entre las condiciones sanitarias y las de salud pública.

Por supuesto, los efectos de la crisis sobre los niveles de vida no se agotan en el ingreso y su distribución, en el empleo, el consumo, la nutrición y la salud, pues hablar de condiciones de vida es algo casi tan amplio como se quiera y más si se considera el problema desde una visión cultural en un sentido más o menos profundo. Hay que partir de la idea de que no existe siquiera un acuerdo preciso sobre lo que se debe considerar como "niveles de vida", y mucho menos lo hay en torno al tan llevado y traído "bienestar", término que en estas notas se ha evitado utilizar. Es necesario precisar, sin embargo, que lo que aquí se ha querido esbozar es sólo la forma en que la crisis está afectando ciertos aspectos básicos de la vida de la mayoría de la

población en México y que esto en buena medida se encuentra al margen de una polémica en torno al desarrollo y al bienestar que parte de un cuestionamiento diferente a algo tan simple como los aspectos elementales de la vida cotidiana de la población más pobre. Es cierto que los elementos que se han expuesto no muestran más que la crisis y el fracaso de una concepción del desarrollo. Pero esto es una cosa y otra muy diferente es el pretender que se renuncie a ciertos objetivos que seguirán siendo prioritarios independientemente de la forma en que se define el problema de la crisis del desarrollo.

No está de más decir que es necesario considerar estos y muchos otros aspectos en una forma sistemática para ampliar la visión sobre una parte de las consecuencias de la crisis. No estamos ante un problema transitorio o de efectos de corto alcance; no se trata de un simple empeoramiento de las condiciones de vida. Las perspectivas económicas y los compromisos financieros adoptados para los próximos años, implican una política que agudizará los problemas que aquí se han reseñado y muchos otros con ellos relacionados. En esas condiciones, estaríamos sólo ante el inicio de un periodo de mayor empobrecimiento para millones de personas si se mantiene la actual capacidad estatal para imponer las políticas que ya muestra consecuencias tan negativas en lo social o en lo productivo. Ante ellas, ante tales políticas y por lo que se refiere específicamente a lo expuesto, parece clara la necesidad de desarrollar planteamientos alternativos ante estos problemas concretos que serán, cada vez más, verdaderos puntos de confrontación, y ante los que ya no se puede responder con ideas que son más gastadas mientras más se repiten sin valorar suficientemente muchos cambios que por más obvios que puedan parecer constituyen un verdadero problema político. Tales planteamientos sólo cobrarán sentido pleno si se desarrollan en la perspectiva global de la discusión y cuestionamiento de la transición en que nos encontramos, es decir, del paso hacia un nuevo patrón

de acumulación, cuya implantación parece tener como condición precisamente el abaratamiento de los costos salariales, la reconcentración del ingreso, la reducción de los gastos públicos en salud, educación, subsidios y otros rubros, y otros requisitos que están conduciendo a la degradación vital a la que nos hemos referido. El problema de las políticas alternativas ante los efectos sociales de la crisis cobra sentido político, entonces, en el marco de la alternativa popular ante esta política económica que se propone dar curso a una nueva economía (y a una nueva sociedad) en la que el nivel de vida de la mayoría de la población no resulta favorecido.

**MOMENTO
económico**

Abril/mayo 1986 23

Información y análisis sobre la coyuntura mexicana.

Publicación mensual del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Universidad Nacional Autónoma de México. **Rector:** Jorge Carpizo. **Coordinador de Humanidades:** Jorge Madrazo Cuéllar. **Director del Instituto de Investigaciones Económicas:** Fausto Bugueño Lomeli. **Secretario Académico:** Carlos Bustamante. **Editor:** Mario J. Zepeda. **Tipografía y formación:** Tipart. **Distribución:** Pedro Medina. De venta en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Torre II de Humanidades, 1er. piso. Apartado Postal 20-721, México 20, D.F. Tel. 550-52-15 Ext. 2904. Número suelto: 100 pesos. Suscripción anual: 1,000 pesos. Interior 1,200 pesos.

Colaboradores: Ma. del Carmen del Valle, Enrique Quintero, Irma Delgado, Ruth Cuevas, Georgina Naufal y Aristeo Tovías.

Ilustraciones: Niños de México, Manuel Peñafiel. IMSS, México, 1979.